

misimos Eucsen y Armas á disposicion de su Juez competente, por las responsabilidades que puedan tener, como acusados de otros delitos.

Devuélvanse las actuaciones al Juzgado de Distrito que las elevó en revision, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así por mayoría de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José M. Iglesias.*—*Juan J. de la Garza.*—*José M. Lozano.*—*José Arceaga.*—*Pedro Ordaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*Manuel de Castañeda y Nájera.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*Luis Velasquez.*—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, 9 de Agosto de 1873.—*Lic. Enrique Landa*, oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el juzgado de Distrito de San Luis Potosí, por José Angel Aguilar en representacion de su hijo Bonifacio, contra la consignacion de este al servicio de las armas.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

Ciudadano Juez de Distrito del Estado.

El promotor del mismo, alegando de buena prueba en el juicio de amparo que José Angel Aguilar ha promovido por su hijo Bonifacio del mismo apellido, pasa á exponer: que la condicion de desertor que el ciudadano general en jefe de la primera brigada de la tercera division le atribuye, y dá por motivo para haber sido aprehendido y afiliado en el cuerpo número trece de caballería, queda desvanecida con el testimonio

de los tres testigos presentados por el solicitante, principalmente por el del C. Guadalupe Hernandez, que asegura: que como vecino, y en los diferentes cargos públicos que ha desempeñado en el lugar de su residencia, nunca ha visto ó sabido que aquel individuo haya pertenecido al ejército. Resulta de lo expuesto, que probada por Aguilar la escepcion de no haber sido soldado, el dicho de aquel gefe militar ó informe que ha dado, no es cierto; y mas lo hace presumir fundadamente, la circunstancia muy significativa de no comprobarlo de la manera que debiera conforme á derecho, ya que afirma la calidad de desertor.

Si, pues, Aguilar, por los tres testigos uniformes que ha presentado, justifica lo contrario de lo que dicha autoridad militar informa, debe estarse á tal justificacion, y de ella deducir que ha probado la violencia con que fué aprehendido y se le obligó á servir en aquel cuerpo; porque ademas, segun ha manifestado el ministerio en su parecer de 4 del que rige, los hechos repetidos é incesantes que ocurren diariamente al molestar á los ciudadanos con esa leva escandalosa que se hace, es otra prueba de ataque que sufren en sus garantías individuales; y nada mas propio ni convincente, respecto del hecho ejecutado en la persona de Aguilar, hecho confirmado por los diferentes casos que á la sombra de la fuerza pasan á cada instante y se cometen con los vecinos pacíficos y establecidos, que arrancados de sus quehaceres, son las víctimas de la arbitrariedad.

Esto supuesto, y habiendo justificado Aguilar que nunca ha pertenecido á la carrera de las armas, debe estarse á lo que ha comprobado, declarándose en su favor el amparo que solicita por haber sido vulneradas en su persona las garantías, de que se queja.

San Luis Potosí, Junio 19 de 1873.—*Gregorio Vasquez.*

Sentencia del C. Juez de Distrito.

San Luis Potosí, Junio 27 de 1873. Visto el juicio de amparo promovido ante este Juzgado por el C. José Angel Aguilar, en favor de su hijo Bonifacio Aguilar, por haber sido este tomado de leva y consignado al servicio de las armas en el cuerpo número 13 de caballería. Considerando: que está probado plenamente que el mencionado Aguilar nunca ha sido soldado, con lo cual, queda destruida la aseveracion del C. general en jefe de la primera brigada de la tercera division, de haber sido aprehendido Aguilar como desertor; á la vez tambien, que resulta comprobado el hecho de haber sido tomado de leva, con infraccion de lo prevenido en el artículo quinto de la Constitucion federal. Que aun cuando no se hubiera probado que Aguilar nunca ha sido soldado, el solo informe con justificacion habria bastado para convencer el ánimo judicial, de no ser soldado, ni ser desertor Aguilar, puesto que allí no se justifica de modo alguno, el hecho de su desercion, designándose al menos el cuerpo del ejército á que perteneció, como debería haberse practicado á falta de la filiacion respectiva que se dice haberse extraviado.

Por tales consideraciones, el fundamento legal expresado y la fraccion primera del artículo primero de la ley de 20 de Enero de 1869; de conformidad con lo alegado por el C. Promotor fiscal y abogado del quejoso, debia declarar y declarar: que la Justicia de la Union ampara y protege al C. Bonifacio Aguilar contra el acto de la autoridad militar que le consignó al servicio de las armas en el cuerpo número 13 de caballería, y contra lo que se interpuso este recurso. Hágase saber; publíquese en los periódicos y elévense estas actuaciones á la Corte Suprema de Justicia de la Nacion para su revision. Así lo decretó y firmó, definitivamente juzgando, el C. Lic. Conrado Diaz Soto, Juez de Distrito del Estado.

Damos fé.—*Conrado Diaz Soto.*—*Antonio R. Jimenez.*—*Heliciano P. Reyes.*

Es copia que certifico. San Luis Potosí, Julio 1º de 1873.—*Conrado Diaz Soto.*

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Agosto 1º de 1873.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de San Luis Potosí por José Angel Aguilar, á nombre de su hijo Bonifacio Aguilar, contra el general en jefe de la tercera division del ejército, por retenerse á Bonifacio en servicio militar en el 13 de caballería; y Considerando: que en el expediente aparece, que se ha vulnerado en la persona del hijo del quejoso, la garantía á que se refiere el artículo quinto de la Constitucion federal, se decretar: que se confirma la sentencia pronunciada respecto de este juicio el 27 de Junio último, por el Juez de Distrito de San Luis Potosí, que declara: que la Justicia de la Union ampara y protege al C. Bonifacio Aguilar, contra el acto de la autoridad militar que lo consignó al servicio de las armas en el 13 cuerpo de Caballería, y contra el que se interpuso este recurso.

Devuélvanse sus actuaciones al Juzgado de que proceden, con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así lo decretaron por unanimidad de votos los Ciudadanos Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*José M. Iglesias.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José María Lozano.*—*José Arteaga.*—*Pedro Ordoñez.*—*Ignacio Ramirez.*—*M. de Castañeda y Nágera.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*Simon Guzman.*—*Luis Velasquez.*—*José García Ramirez.*—*Ignacio Altamirano.*—*Luis M. Aguilar,* secretario.

Es copia que certifico. México, Agosto 19 de 1873.—*Lic. Enrique Landa*, oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Zacatecas, por Aniceto Raigosa contra su consignacion al servicio de las armas.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL

Al Juzgado de Distrito.

El Promotor fiscal dice: que el día 7 de Junio próximo pasado, compareció Aniceto Raigosa, exponiendo: que de tránsito por Juchipila, el Gefe político de aquel partido despues de informarse de su nombre y residencia, lo consignó al servicio de las armas, remitiéndolo para esta ciudad el día 8 de Mayo último; y que ni en Juchipila, ni en algun otro punto del tránsito se le ha juzgado criminalmente, y que aunque lo hubiera sido, no podía imponérselo por castigo la prestacion de servicios personales en los cuerpos del Ejército, contra su expresa voluntad y consentimiento, violándose con ello la garantía consignada en el artículo quinto de la Constitucion federal; y resultando de lo expuesto; primero, que por la consignacion del C. Gefe político de Juchipila, se le pasó por caja, feliándolo en el décimo tercero Batallon de línea; y segundo: que contra su voluntad se le obliga á servir en las armas, cuando solo por el sorteo ó engache pueden cubrirse las bajas del ejército; por lo que pide al Juzgado se sirva declarar, que la Justicia de la Union lo ampara y protege contra la orden que lo consignó á aquel destino y contra el acto que lo obliga á permanecer en él; dictando desde luego la orden de suspension provisional de los actos reclamados, en consideracion á la garantía violada y las privaciones y molestias que sufre por la falta de libertad de que se

le ha privado, y todo de conformidad con el artículo constitucional citado y ley de 20 de Enero de 1869.

Suspense dicho acto, por auto de 9 de Junio anterior, de conformidad con los artículos quinto, sexto y noveno de la ley expresada, se mandó comunicar al C. Capitan José María Bejar, encargado de los piquetes de la Federacion en esta ciudad, para que inmediatamente pusiera en libertad á Aniceto Raigosa, y se remitiera copia de su ocurso al C. Gefe político de Juchipila, para que dentro de tercero día, informara con justificacion sobre su contenido, comendándose en seguida traslado al que suscribo para que pidiera lo que hubiere lugar. En seguida se hizo constar, que no habiendo cumplido con la orden librada el C. Capitan Bejar, se le dirigió oficio para que cumpliera con ella, y habiendo sido remitido el quejoso, se le notificó el auto anterior, presentándose pocos momentos despues para manifestar que habia sido puesto en libertad; y que no habiéndose recibido hasta el 30 de Junio el informe de la Jefatura Política de Juchipila, se acordó pasar al que suscribo por el término de la ley; pero recibido en la fecha dicho informe, el C. Gefe político responsable, expone que Aniceto Raigosa, originario de la municipalidad de Juanacatic en el Partido de Villanueva, individuo que hacia algunos días vivia en el barrio de San Sebastian teniendo á su lado una muger que se habia extraído furtivamente del seno de su familia, del citado Juanacatic; y que por informe del comisario del barrio, sobre que ademas de lo expuesto, expresó que la conducta de dicho hombre era sospechosa, supuesto que poco se le veia en el trabajo y algunas veces se desaparecia del barrio; por lo que teniendo á la vista la orden del gobierno del Estado por la que asignó al partido de su cargo el número de reemplazos que debía remitir para cubrir las bajas del ejército; de cuya orden acompaña copia certificada, juzgó que Raigosa, como otros muchos criminales que